

República de Colombia
Rama Judicial
Distrito Judicial de Antioquia



Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de
Dominio de Antioquia

Medellín, ocho (08) de marzo de dos mil veintitrés (2.023)

Auto Interlocutorio No.	011
Radicado Juzgado	05-000-31-20-002-2023-00003-00
Radicado Fiscalía	1100160990682019-00469 E.D.
Proceso	Extinción de dominio
Trámite	Control de legalidad a medidas cautelares
Fecha resolución de medidas cautelares	¹ 22 de noviembre de 2.021
Fecha Materialización de medidas cautelares	25 y 26 de noviembre del año 2021
Autoridad que decretó medida:	Fiscalía 65 especializada
Afectados por la medida	Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Solicitante y apoderado del afectado	Daniel Zuluaga Cosme ²
Número de bienes cautelados por los que se reclama el control.	27
Tipo de Bien	Inmuebles (26) / y Muebles vehículos (1)
Identificación de los bienes cautelados.	Matrículas inmobiliarias: 001-919090 / 001-919087 / 01-1032075 / 001-919087 / 001-2512 / 001-965212 / 001-964893 / 001-965087 / 001-1117301 / 001-1117806 / 001-1117688 / 001-1305610 / 001-1305042 / 001-1305394 / 001-1333906 / 001-814179 / 01-496730 / 01-496776 / 001-496703 / 001-474767 / 01-1117318 / 001-1117682 / 001-1117817 / 001-1260523 / 001-1361378 y 001-1361373 Placas JYT-348
Reporte de causales de extinción de dominio enrostradas y/o por las cuales se procede en la causa principal:	Numeral 1 “Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita”. Numeral 4 “Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas”. Numeral 5 “Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas”. Numeral 7 “Los que constituyen ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes”.
Causales invocadas de control de legalidad	La Caducidad del artículo 89 CDEDD
Despacho que conoce del proceso principal	Juzgado Primero Penal Del Circuito Especializado En Extinción De Dominio - Antioquia
Radicado del proceso principal en juzgamiento	05-000-31-20-001-2023-00001-00
Asunto	Declara legalidad medidas.
Temas	Vigencia de las medidas y su no Caducidad frente a la presentación de la demanda

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a resolver la solicitud de control de legalidad a las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro que soporta los bienes descritos en el cuadro de la referencia, reclamada por el apoderado **Daniel Zuluaga Cosme** con memorial en representación de **Gloria María Díez**

¹ El solicitante reporta en su memorial como fecha de la medida cautelar el 6 de noviembre de 2.019.
² Notificaciones: Carrera 43A 1 sur 188 of. 1007, Torre Empresarial Davivienda, Medellín Contacto: 3226567489 e-mail: dzuluagapenalista@gmail.com zhattorneysenterprise@gmait.com zhdireccion@gmail.com

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Diez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Diez y Caroline Londoño Diez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Diez y Caroline Londoño Diez y ordenadas por la Fiscalía 65 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio en decisión contenida en la resolución de medidas cautelares de radicado 1100160990682019-00469 E.D. del **22 de noviembre de 2.021.**

2. HECHOS

Lo factico se concreta con lo predicado por la fiscalía en la misma resolución que se controla en punto a que la investigación tiene como génesis la inspección de Judicial realizada al proceso adelantado por la fiscalía 65 Especializada de la Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado, bajo el SPOA 050016099029-**2018-00042**, que sirvió de soporte al investigador de Policía Judicial Gaula Antioquía, para solicitar adelantar trámite de Extinción de Dominio al cabecilla e integrantes de este Grupo delincuenciales común organizado GDCO, conocido como "SAN RAFAEL o LOS DE SAN RAFA ", organización integrada al Grupo Delincuencial Organizado GDO "LA UNION".

Está GDCO "SAN RAFAEL o LOS DE SAN RAFA ", al parecer es liderada por DAVID FERNANDO LONDOÑO DIEZ, alias "Davisito o la Mocha", quien desde hace muchos años se ha dedicado a la ejecución de diferentes actividades ilícitas, entre otras, tráfico de estupefacientes, extorsiones, desplazamientos, homicidios, hurtos, que le ha permitido a este grupo delincuencial permanecer en el tiempo, manteniendo su hegemonía en los sectores de su injerencia como son los barrios San Rafael perteneciente a la

Comuna 15 Guayabal de Medellín y los barrios colindantes como La Colina, La Colinita, El Bolo, del municipio de Itagüí.

La permanencia en el tiempo de este grupo delincuencial de acuerdo a las pruebas recaudadas por la fiscalía delegada en el asunto, en parte se debe a alianza criminal con la GDO "La Unión", que le ha permitido a pesar de estar capturado continuar desde el centro carcelario seguir ejerciendo el control de esta organización, para ello cuenta con el apoyo de su hermano CARLOS ANDRES LONDOÑO DIEZ, conocido como "Andresito", quien tiene pleno conocimiento de todas las actividades ilícitas que en el sector de injerencia se ejecutan y de los demás integrantes de la organización.

Los actos de investigación³ realizados por la fiscalía logran establecer las diferentes actividades ilícitas ejecutadas por este grupo delincuencial "San Rafael o San Rafa", con las cuales se demuestra que este grupo delincuencial incluso por mantener su control ocasiono una confrontación con otros grupos delincuenciales en particular con uno conocido como "La raya", de donde se derivaron una serie de homicidios, extorsiones, desplazamientos, entre otros, que incluso llevó a las autoridades a prender las alarmas por la oleada de homicidios que estaban ocurriendo en los sectores de injerencia de este grupo delincuencial.

Esta confrontación se produjo con el fin de lograr afianzarse en el sector georeferenciado y no permitir que el negocio ilícito de la venta y distribución de sustancias estupefacientes pasara a hacer controlado por otro grupo

³ Diferentes declaraciones, entrevistas, fuentes no formales, reconocimientos, inspecciones judiciales, noticias criminales, etc.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

delincuencial, para ello no tuvo ningún inconveniente de ordenar homicidios, amenazas, desplazamientos, extorsiones, entre otras.

Las actividades ilícitas ejecutadas por este grupo delinque, el cual se encuentra debidamente estructurado y organizado, con división de tareas o roles, donde cada uno debe responder por la labor encomendada, ya sea como vendedor o jíbaro, campanero, distribuidor, coordinador y finalmente el ala sicarial quienes se encargan de los homicidios y mantener a la población bajo el miedo y la zozobra.

Todas estas actividades ilícitas les genera grandes ingresos para este grupo delinque, que debe pagar una franquicia al grupo de mayor jerarquía, en este caso al GDO “La Unión”, porque para nadie es un secreto que este tipo de organizaciones para que puedan ejecutar las diferentes actividades ilícitas en determinado sector, deben contar con el permiso o autorización de la organización de mayor jerarquía.

Los ingresos económicos obtenidos por estas actividades ilícitas, les ha permitido la adquisición de bienes algunos figuran de propiedad de los cabecillas o coordinadores, pero en otros casos, se logró establecer que fueron puestos a nombre de su núcleo familiar y allegados de esta forma evitar ser perseguidos e ingresarlos al comercio para darles visos de legalidad, pero olvidan que en temas de extinción de dominio debe existir una coherencia en cuanto al origen de los ingresos lícitos frente a los bienes que se adquieren y a su vez, que esta propiedad cumpla la función social y ecológica, que le es inherente.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Diez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Diez y Caroline Londoño Diez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

Esta narrativa fáctica origina el radicado extintivo 1100160990682019-00469 E.D.⁴ y el 2021-11-22 se emite resolución de medidas cautelares en la que se vinculan los bienes referidos por el solicitante.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

El 13 de enero de 2.023 se recibe de reparto con secuencia 2 grupo 05 la solicitud de control de legalidad a medidas cautelares decretadas por la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio de Medellín, elevada por Daniel Zuluaga Cosme misma que es avocada por este despacho el 17 de febrero de 2.023 con auto 054, concretándose como causal la innominada de “ ***Caducidad – Vigencia – por que han pasado 6 meses sin que se haya presentado demanda de extinción de Dominio alguna por parte de la Fiscalía 41 de Medellín adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalía especializada para la extinción de dominio de la fiscalía general de la Nación, configurándose, por ende, lo preceptuado en el artículo 89 de la ley 1708 de 2014, modificado por el artículo 21 de la ley 1849 de 2017.*** ” y se ordena correr traslado del 113 del CDED.

Al inquirirse por la existencia del proceso principal según constancia sumarial se advirtió el radicado **05-000-31-20-001-2023-00001-00** de conocimiento del homologo par de esta territorialidad. Por lo que se requirió el respectivo link procesal, para hacerlo parte de esta causa. De este proceso se reporta en gestión con fecha 16 de febrero corriente año auto de admisión del mismo; esto es se encuentra avocado y en trámite de juzgamiento, en las voces del régimen de extinción de dominio.

⁴ 18 de septiembre de 2.019 informe iniciativa investigativa.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

El traslado del control se surtió secretarialmente de manera positiva y se pasa a despacho la causa indicando que el termino se radicó el 2 de marzo presente año, memorial del abogado Camilo Eduardo Paipilla representante del Ministerio de Justicia y del derecho mediante el cual descorre traslado de la solicitud de control de legalidad⁵.

4. BIENES OBJETO DEL CONTROL DE LEGALIDAD

La peticionante del control de legalidad distingue los siguientes bienes referenciados:

- Inmuebles con Matrícula Inmobiliaria 001-919090 / 001-919087 / 01-1032075 / 001-919087 / 001-2512 / 001-965212 / 001-964893 / 001-965087 / 001-1117301 / 001-1117806 / 001-1117688 / 001-1305610 / 001-1305042 / 001-1305394 / 001-1333906 / 001-814179 / 01-496730 / 01-496776 / 001-496703 / 001-474767 / 01-1117318 / 001-1117682 / 001-1117817 / 001-1260523 / 001-1361378 y 001-1361373.

-Vehículo con placas JYT-348

Bienes de propiedad inscrita de sus procurantes.

En sumo procesalmente se encuentran positivamente inscritas las medidas cautelares decretadas en su disfavor tal como lo reflejan los correspondientes reportes de certificados de tradición.

⁵ Archivo electrónico nro. 17 tamaño 603KB

En lo que concierne a la materialización en igual sentido.

5. CAUSALES INVOCADAS POR LA PARTE SOLICITANTE

Antepuesto a adoptar la decisión que en derecho corresponde, y con la finalidad de enmarcar la discusión jurídica planteada por la demandante, se debe indicar de manera previa y destacada que la causal invocada, en principio hacía improcedente la petición de control de legalidad a las medidas cautelares, debiéndose desechar de plano la solicitud impetrada por el apoderado judicial, en razón a que las causales prevista por el legislador son taxativas, y en las circunstancias o causales señaladas en el artículo 112 del C.E.D., no se encuentra el vencimiento del término estipulado en el artículo 89 de la obra en cita. Empero sobre este particular punto, el Tribunal Superior de Bogotá –Sala Penal de Extinción de Dominio, se pronunció sobre el tema, en decisión del 24 de agosto de 2021, siendo Magistrado Ponente el Dr. William Salamanca Daza,⁶, quien es el competente para pronunciarse sobre la cancelación o no de las medidas cautelares con ocasión del vencimiento de términos, se dijo:

(...) “Una tercera conclusión a la que llega el Tribunal es que el competente para pronunciarse en torno a la postulación derivada del artículo 89 del Código de Extinción de Dominio, es el Juez de Conocimiento porque sólo éste puede garantizar una decisión imparcial ante los planteamientos del afectado, pues, de ser el Fiscal, la tutela efectiva del derecho trocaría con la inimpugnabilidad de las órdenes del instructor, quien además es el titular de la facultad de imponerlas.

Entonces, en una lectura del derecho a la contradicción y del debido proceso, resulta una carga más allá de lo razonable para el afectado, que fuera de afrontar los efectos del proceso extintivo, la revisión del vencimiento de los términos que formule esté dé cuenta de la investigadora que los dispuso; de ser así se desdibujarían las garantías de igualdad e imparcialidad de las autoridades que deban abrigar al ciudadano.

El siguiente aspecto por resolver es cuál es el procedimiento regulado por la Ley, para que se surtan los clamores que en ese sentido ventilen las partes. A prima facie, pareciera que no existe un trámite expedito para realizar verificaciones como la que se demanda por el vencimiento de término previsto

⁶ Control de Legalidad 110013120001201900046-01

en el canon 89 del CED, esa aparente anomia se resuelve acatando el tenor literal del artículo 26 del CED: "La acción de extinción de dominio se sujetará exclusivamente a la Constitución y a las disposiciones de la presente ley. En los eventos no previstos se atenderán las siguientes reglas de integración...", arribado a este estanco del proveído huelga recordar que el Código de Extinción de Dominio en los artículos 111 y siguientes, contempla la posibilidad de cuestionar los gravámenes ordinarios y extraordinarios por medio de un control rogado; sin embargo, su operancia se circunscribe a cuatro elementos taxativos, a saber:

"1. Cuando no existan los elementos mínimos de juicio suficientes para considerar que probablemente los bienes afectados con la medida tengan vínculo con alguna causal de extinción de dominio. 2. Cuando la materialización de la medida cautelar no se muestre como necesaria, razonable y proporcional para el cumplimiento de sus fines. 3. Cuando la decisión de imponer la medida cautelar no haya sido motivada. 4 cuando la decisión de imponer la medida cautelar esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas."; en caso de no presentarse alguna de esas causales, la exploración de su legalidad no es procedente.

Ello no quiere decir que esas sean las únicas razones por las que el afectado pueda reparar en las cargas que soporta, como quiera que el artículo 89 del CED contempla una quinta razón a merced de la cual el interesado puede solicitar que se revalúe su vigencia; según la norma en comento, **"Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento.** (subraya la Sala). El imperativo de la norma grava a la Fiscalía cuando ha ordenado extraordinariamente la imposición de las restricciones, su deber procesal es cumplir con un término perentorio para tomar la decisión de fondo que corresponda con la que cierra el ciclo a su cargo, esto es, formulando demanda o archivando las diligencias. (...)

Sobre los deberes procesales ha referido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C-279 de 2013:

(...) "La jurisprudencia ha distinguido de manera clara entre deberes, obligaciones y cargas procesales, así: **"Son deberes procesales aquellos imperativos establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que miran, unas veces al Juez, otras a las partes y aun a los terceros, V su incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido; se caracterizan porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento.** Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas. En tanto las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso; las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables". No obstante, por el solo hecho de ser pertinente para un proceso no toda carga puede considerarse a priori ajustada a la Constitución, pues las consecuencias derivadas de una carga impuesta por el legislador, no deben ser desproporcionadas o irrazonables. " (resalta el Tribunal)

Pese a que los motivos por los cuales se acude dentro del proceso de afectación de los derechos reales al canon 112, son diferentes y excluyentes de la reclamación que pueda hacerse en aplicación de su prolongación cuando son impuestas extraordinariamente por ministerio del artículo 89, lo cierto es que emanan de los deberes que le son exigibles a la Fiscalía General de la Nación, y por ello eventualmente los efectos de una u otra decisión a la hora de examinar su cumplimiento pueden ser los mismos, bien sea manteniendo el statu quo, o sea, la eficacia de las medidas cautelares porque no se prueba ninguna de las causales de ese canon, o como se propone aquí, porque el paso del tiempo, en tratándose de las extraordinarias, no enerva su vigencia en los registros; o si se prueba alguna de las cinco variables conocidas, dándole aplicación armónica a los preceptos 89 y 112, el pronunciamiento del Juez no puede ser distinto a la declaratoria de su ilegalidad y de contera la orden de levantamiento.

Dicho esto, el Tribunal concluye como cuarto elemento, que, ante una verificación semejante, o sea, el cumplimiento de las imposiciones de la ley por cuenta de la Fiscalía, el procedimiento debe guardar identidad. En tal virtud, si el término previsto en el apartado 89 del CED obedece a la dinámica del principio de legalidad que regula la invasión a los derechos reales dispuesta por la Fiscalía, entonces, no es necesario que el Juez de extinción del dominio acuda a otras fuentes del derecho para resolver cuál es camino adjetivo previsto para la verificación del paso del tiempo, por cuanto el incidente regulado por los artículos 111 a 113 fue diseñado por el Legislador para examinar la justeza y cumplimiento del comportamiento procesal del instructor, por lo tanto, esa es la ruta idónea para ventilar el control a los términos, sin que ello se oponga al principio de taxatividad de las causales porque esta, la expiración del plazo, emana igualmente del Código de Extinción de Dominio, artículo 89, y ese mandato sólo se explica si se aplican armónicamente una y otra regla, de lo contrario la configuración elegida por el Congreso de la República no hubiera formulado categóricamente un deber tal para el ente de persecución.”. (...)

Así entonces y por orden jurisprudencial se presenta en estas sumarias como causal de control de legalidad a las medidas cautelares la **de caducidad o vencimiento de términos contenida intrínsecamente en el artículo 89⁷ del Código de Extinción de dominio** que invocó la solicitante en su escrito, siendo ésta:

“... medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento”

6. COMPETENCIA

⁷ Código de Extinción de Dominio Artículo 89. Medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio Excepcionalmente, **el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio**, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. **Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento.**

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

La Jurisdicción como manifestación concreta de soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio nacional como única e indivisible y en virtud de la especialidad de las diversas materias jurídicas que ciñen la competencia y que se deben considerar y aplicar para la mejor y más eficiente prestación de este servicio público, es decir, en atención del aspecto funcional, carga y materia, ha de significarse que por la naturaleza del asunto, especialidad y calidad del operador de instancia en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 39 de la ley 1708 del 20 de enero de 2014, este Despacho y correlativamente el suscrito funcionario es competente para resolver la solicitud de control de legalidad presentada por la apoderada de la parte afectada. El tenor literal de la citada norma es el siguiente:

“ARTÍCULO 39. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Los Jueces de Extinción de Dominio conocerán:

(...) 2. En primera instancia, de las solicitudes de control de legalidad dentro de los procesos de su competencia.

(Subrayado y negrilla fuera del texto)

Como ya se rotuló, el presente asunto se adelanta sobre algunos bienes⁸ que se encuentran ubicados en la jurisdicción del Distrito Judicial de Antioquia; sobre el cual se decretó, registró y materializó las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo por parte de la Fiscalía 65 Especializada EEDD, respecto del cual se solicitó verificar su legalidad por parte de **Daniel Zuluaga Cosme**, obrando en representación de quien al parecer son titulares de dominio de dichos bienes como presuntos afectados en la Acción de Extinción de la referencia; motivo por el cual resulta viable hacer el presente pronunciamiento que en derecho corresponda de manera motivada en la presente decisión.

⁸ Los descritos en el acápite 4 de esta providencia.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

7. OPORTUNIDAD DEL CONTROL DE LEGALIDAD

La ley de extinción de dominio no nos dice expresamente nada al respecto, por lo que es necesario remitirnos a lo considerado por nuestros magistrados de segunda instancia, que en sus decisiones han templado y morigerado el asunto, y siendo reitera sobre el tema en decisión del veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021), el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DEL DOMINIO Magistrado Ponente: MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA en Radicado: 050003120002201900067 01. Al Resolver el recurso de apelación formulado por los afectados CLAUDIA MARÍA GARZÓN BOLÍVAR y HUGO HUMBERTO GIRALDO OCHOA, contra de la decisión de 11 de Septiembre de 2019 a través de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia "rechazó de plano" la solicitud de control de legalidad a las medidas cautelares impuestas el 10 de marzo del 2016, por la Fiscalía 44 de Extinción del Derecho de Dominio, sobre los bienes con matrículas inmobiliarias 324-45506, 324-51947, 324-34462, 324-44708, 324-63682, 324-37437, 324-34845 y 324-67939, de propiedad de Reinaldo Ochoa Mesa, Hugo Humberto Giraldo Ochoa y Claudia María Garzón Bolívar., consideró:

*(...) "En ese orden, concluye la Corporación que el período oportuno para solicitar el control a las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía durante la fase a su cargo, se extiende hasta el momento previsto en el artículo 141 del CED, pues en estricto derecho la Fiscalía tiene el poder de imponer gravámenes hasta poco antes de remitir el proceso a la jurisdicción, incluso cuando ya ha concluido la investigación; esto, por un lado, posibilita al afectado gozar de la plena garantía contemplada en los artículos 111 y siguientes *ibidem*, y por otro, que no se surta un incidente procesal cuando el juicio ha tomado plena forma, teniendo que como se expuso, los controles a las decisiones del juez se encuentran cobijadas por los recursos que las partes pueden interponer en contra de las decisiones de fondo, a merced de que, en ese ciclo, sí existe la segunda instancia ."²*

.....

*En dicho escenario de medidas precautelativas no procede recurso alguno, pues para el efecto se ha previsto el control de legalidad —art. 111- y la contradicción tiene pleno ejercicio dentro de los 10 días siguientes a la notificación; luego previo a que finalice el traslado a los sujetos procesales en el marco del art. 141 *ibidem*, constituyen el escenario idóneo para sanear el procedimiento al amparo de temas de incompetencia, impedimentos, recusaciones o nulidades y superado este estanco se avanza en la etapa probatoria propiamente a instancia de las partes o interviniente, incluso se formulan observaciones al libelo demandatorio y el juez resuelve mediante auto interlocutorio; es decir, ello redundaría en que "la*

² Sala de Extinción de Dominio Tribunal Superior de Bogotá, radicado 110013120002201600105 01 del 12 de junio de 2017.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Diez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Diez y Caroline Londoño Diez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

contradicción de la demanda presentada por la Fiscalía tendrá lugar durante la etapa de juicio" ante el Juez competente —art 132-.

Empecé, como el Legislador no previó taxativamente el momento para acudir al control, sólo se dice que quien padece el trámite en contra de su patrimonio, en aras limitar el poder a cargo de la Fiscalía General de la Nación, de cara a la invasión al derecho a la propiedad, está facultado para pedir que el juez competente examine el asunto. (...)

En ese orden se tiene que la solicitud o revisión de las medidas cautelares presentada, **es oportuna, ya que** para esta oportunidad calendaria existe un proceso que enrola dichos bienes que se encuentra para inicio de fase de juzgamiento, pues su demanda, aunque que ya se ha presentado y ha sido admitida, tal como se advierte del link compartido en esta no se ha cumplido o finalizado la etapa correspondiente al **traslado del 141 id.**

Así que la proclama en el asunto bajo examen se ha hecho dentro del término jurisprudencial, es decir que la petición de control de legalidad se forjó dentro de la oportunidad legal, sin preclusión de la misma y que, desde este contexto, es procedente, lo que hace viable continuar con su estudio, para resolverse.

8. DE LA SOLICITUD

En memorial el abogado, solicita que revise la resolución de medidas cautelares, pues en su sentir argumentativo **han pasado más de 6 meses** desde la fecha en que se expidió la Resolución de las Medidas Cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo respecto de los bienes que prohíja; destacando que, en el caso concreto, resulta notorio que dicho plazo para presentar la demanda extintiva, se encuentra fenecido, por cuanto la resolución de medidas cautelares data del **22 de noviembre de 2021**, y que el plazo previsto para que se hubiere presentado tal demanda fue hasta el **22 de mayo de 2022**. No obstante, la Fiscalía presentó la demanda solo hasta el **día 24 de junio de 2022**, correspondiendo por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia, el cual mediante auto Nro. 384 del 15 de septiembre de 2022 inadmitió la demanda por no cumplir con los requisitos de ley contemplados en el artículo 132 de la Ley 1849

de 2017 dándole traslado por el término de cinco días para que la Fiscalía subsanara los yerros advertidos, sin embargo, el día 4 de octubre de 2022 mediante auto interlocutorio Nro. 70 el Juzgado en mención rechazó la demanda extinción de dominio y ordenó devolver las diligencias a la delegada de la Fiscalía y al día de presentación de su control en su sentir afirmó en el escrito que no se ha presentado la demanda o por lo menos, no obran elementos que lo dilucide para éste.

Y lo anterior lo fundamenta en las siguientes apreciaciones más relevantes:

(...) ... que la consecuencia del rechazo de la demanda revive el término inicial para la presentación de la misma, en el caso en mención al día de hoy se supera doblemente el tiempo establecido, influyendo en la urgencia excepcional con relación a la imposición de las medidas cautelares. El tribunal Superior de Bogotá Sala Extinción de Dominio en decisión dentro del radicado 2019-00010 deprecia lo siguiente;

*... Otra circunstancia que se puede presentar, no regulada en el canon rector es, precisamente, el rechazo del libelo, que, por remisión normativa al Código General del Proceso en tanto compatible con este instituto, tiene lugar por carencia de jurisdicción, competencia o cuando **inadmitido el escrito, el interesado no corrige los defectos señalados en el término legal. Evento este último que influye en las cautelas decretadas anticipadamente, por cuanto al no tener la demanda efecto jurídico alguno y regresar a la parte acusadora, en principio estas deberán levantarse de haber excedido los 6 meses en comento**, mientras que de ser inadmitida, por estar supeditada a la implementación de las correcciones indicadas por el director de la causa -dentro de los 5 días-, obliga a esperar su definición para dilucidar el camino a seguir... "(Subrayas por fuera del texto".*

Se ha estado esperando por largo tiempo a que se presentara por parte de la delegada de la Fiscalía la demanda de extinción de dominio para así poder activar la debida defensa, sin que esto sea posible, máxime cuando el proceso de extinción no tiene publicidad en la presentación de la demanda y solo desde la notificación del auto que admite la misma es que se abre el amplio conocimiento de las pruebas que respaldan el proceso de la Fiscalía... (sic)

(...)

Corolario de lo anterior peticiona, en control jurisdiccional de legalidad posterior de la medida cautelar, se deje sin efecto las medidas cautelares de embargo y secuestro y consecuente con ello se decrete la ilegalidad de las mismas.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

9. CONCEPTO DE LA FISCALÍA

En un juicioso ejercicio del protocolo Dentro del traslado otorgado por la ley de extinción y dentro del término, la fiscalía no presenta memorial o alegación en el que descurre traslado de la solicitud de control, ni explica la razón de su pachorra en el trámite.

10. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Dentro del traslado otorgado por la ley de extinción, este interviniente presentó alegato, en el que solicita que desestime el control de legalidad impetrado por parte de Daniel Zuluaga Cosme, como quiera que no se configuran los requisitos contemplados en el artículo 112 de la Ley 1708 de 2014 (sic) para declarar la ilegalidad de las medidas cautelares decretadas respecto del bienes procurados en esta causa, y para sustentar esta posición, presenta una en primera medida una breve explicación acerca de la naturaleza, finalidad y objetivos del proceso cautelar en materia de extinción de dominio, para luego, estudiar los argumentos esgrimidos por el afectado en su solicitud de declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares, y después puntualiza los siguientes planteamientos, así:

... 1) Cuando se alega el vencimiento del término de seis (6) meses contemplado en el artículo 89 del C.E.D. respecto la facultad excepcional de imponer medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio:

(...)

A juicio de este representante judicial, resulta mucho más importante tener presente cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento de este término legal señalado por el art. 89 del C.E.D. En este sentido, es preciso recordar ante esa judicatura que el mismo Tribunal Superior de Bogotá, a través de la Sala Especializada de Extinción de Dominio, señaló dentro del proceso con radicado 6600131200012019-00010-01 con ponencia de la H.M. Esperanza Najjar Moreno, sobre el vencimiento del término de los seis meses, lo siguiente:

Auto Interlocutorio 011

Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00

Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio

Asunto. Declara legal medidas cautelares.

Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.

Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

“De suerte que, la opción interpretativa razonable respecto el alcance del término citado-que preserva la voluntad del hacedor de leyes-, conduce a afirmar que, transcurrido un término de seis meses de gravados los haberes perseguidos, sin que se profiera decisión de archivo o se presente demanda de extinción, se activaría el presupuesto objetivo allí señalado a fin de cuestionar la continuación de las cautelares. En ese orden, colige la Sala, la luz de las prerrogativas de defensa y contradicción -arts. 7 y 13 C.E.D., los afectados y demás intervinientes se encuentran habilitados para solicitar la cancelación o levantamiento de las cautelares como consecuencia de la aplicación del multicitado precepto 89 ídem tras acreditar el supuesto de hecho allí descrito, esto es, (i) que en vista a la urgencia y necesidad que ameritan, aquellas hayan sido impuestas antes de la presentación de la demanda, y (ii) que entre uno y otro acto transcurran más de 6 meses, independiente de que, con posterioridad, se promueva el juicio.”

“Lo anterior no conlleva la declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares en consideración a que los efectos restrictivos de los instrumentos precautorios no devienen de la configuración de alguna de las causales descritas en el artículo 112 de la Ley 1708 de 2014; opuesto a ello, insiste la Sala, se concreta en la consecuencia de la preclusión de un término procesal.” (Subrayado y negrilla es propio)

Siguiendo este criterio del Tribunal Superior me permito manifestar ante su despacho que el vencimiento del término consagrado en el artículo 89 del C.E.D. no resulta en la declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares por cuanto tal situación no implica un yerro jurídico consagrado en el Código de Extinción de Dominio que genere su inconformidad con las normas legales que lo regulan. En otros términos, si pasan los seis meses allí establecidos, se puede alegar que la Fiscalía de conocimiento dejó precluir un término legal para proferir decisión de archivo o demanda, más no se puede predicar que las cautelares son ilegales y procede su revocatoria. Recuérdese que esta interpretación es la sentada por la Sala Especializada de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, con base en extracto del fallo anteriormente citado.

Adicional a ello, me permito traer a referencia otro pronunciamiento emitido por la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá que fue citado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá al resolver control de legalidad con el rad. 110013120001-2022-00017-01 mediante auto interlocutorio No. 76, a saber:

“Pues bien, analizado dicho planteamiento de cara a la legalidad, debe decirse que no es correcto, pues el legislador no lo contempló, afirmar que el término de vigencia de las medidas cautelares excepcionales se encuentre integrada a alguna de las cuatro causales previstas en el artículo 112 del CED”.

“Tampoco consideró el legislador que dicha regla objetiva debía entenderse como una causal adicional de la disposición en cita, es decir, como una quinta razón por la cual procedería que el juez de conocimiento entrara a estudiar la declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares, y en tal sentido debía decirse que el funcionario judicial no podía llegar a suponer aquello que no estaba previsto en la norma (...)”.

“Y como quiera que el vencimiento de las medidas cautelares excepcionales es una institución jurídica que está regulada por una disposición normativa especial -art. 89 CED-, se colige que es un asunto que debe ser tramitado ante el organismo judicial que se ocupó de su imposición, en este caso, la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio, pues la competencia del juez especializado de extinción de dominio se circunscribe a conocer del control de legalidad de las medidas cautelares, por razón de las causales previstas en el artículo 112 del estatuto Extintivo” (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Extinción del Derecho de Dominio. Rad. 410013120001202000049 01 (N.I. 36). M.P. María Idalí Molina Guerrero).

De tal forma que, en los eventos en que la Fiscalía vulnera el plazo establecido en el artículo 89 del Código de Extinción de Dominio, lo procedente no es acudir ante el Juez para solicitar el control de legalidad de las medidas cautelares, al no existir en la Ley una causal en tal sentido, sino que deberá solicitarse ante la entidad

Auto Interlocutorio 011

Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00

Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.

Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.

Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

que las decretó para que proceda a su levantamiento. En conclusión, este representante solicitará que esta objeción señalada en el control de legalidad bajo comentario no sea considerada en tanto no se demuestra la configuración de una causal de ilegalidad y, por lo visto en precedencia, el vencimiento del término de seis meses no implica la declaratoria de ilegalidad de las medidas cautelares.” (sic)

En consecuencia, de lo anteriormente expuesto, solicita sea desestimada la solicitud de control de legalidad elevada por el abogado DAVID ZULUAGA COSME, en nombre de las personas afectadas en referencia, sobre las medidas cautelares decretadas el 22 de noviembre de 2021 por la Fiscalía 65 Especializada en Extinción de Dominio, por considerar que las mismas no se ajustan a derecho de conformidad con los planteamientos desarrollados por éste en su escrito y en consecuencia, solicita mantener la vigencia de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, ordenadas en la decisión reseñada sobre los bienes indicados en la presente solicitud de control de legalidad a nombre de las personas afectadas.

11.CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Este interviniente guardó silencio durante el traslado.

12. FUNDAMENTOS DEL CONTROL DE LEGALIDAD.

Con base en lo expuesto, el Despacho analizará la solicitud presentada por la parte afectada, a fin de verificar si se dan los presupuestos para acceder a su pretensión, o si por el contrario debe ser legalizada las medidas cautelares ordenada por la Fiscalía 65 Especializada el 22 de noviembre de 2021. Concretamente sobre el tema de vigencia o permanencia del tiempo de las medidas cautelares.

13. CONSIDERACIONES GENERALES

La finalidad por excelencia de las medidas cautelares, no es otra que garantizar que el bien objeto de la acción no sea ocultado, gravado, negociado, distraído, transferido o que pueda sufrir deterioro, extravío o destrucción, o para cesar su uso o destinación ilícita, conforme lo prevé el artículo 87 del estatuto de Extinción de Dominio, en aras de evitar así que en caso de proferirse una sentencia que declare la extinción de dominio sobre determinado bien, esta carezca de efectividad por carencia del objeto.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la propiedad privada es objeto de protección Constitucional, conforme al artículo 58¹⁰ de la Carta Política, y también a través de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en su artículo 17¹¹, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 21¹².

El desarrollo jurisprudencial ha establecido que la propiedad es un derecho fundamental cuando tiene una relación directa con la dignidad humana¹³, lo que determina fortalecer su ámbito de protección, ya que los derechos

¹⁰ Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

¹¹ ... 17. Siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad, nadie podrá ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exige de manera evidente, y a la condición de una indemnización previa y justa.

¹² Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

¹³ Sentencia T-454/12 Magistrado Ponente Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. _

fundamentales son un “*parámetro de legitimidad del sistema político y jurídico*”¹⁴, por lo que deviene que la propiedad no puede ser objeto de restricciones irrazonables o desproporcionadas que desconozcan el interés del propietario de obtener una utilidad económica sobre sus bienes y contar con las condiciones mínimas de goce y disposición.

Pese a lo anterior, es claro que la propiedad no es en realidad un derecho absoluto, pues el Estado puede imponer limitaciones, como ocurre en los procesos de extinción de dominio, por razón de haber sido adquiridos con dineros originados en actividades ilícitas o ser destinados al delito, siendo entonces las medidas cautelares el instrumento para evitar que los bienes objeto del proceso puedan ser ocultados, distraídos, negociados o transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción, o también que pueda persistir su indebida destinación.

La vigencia de la Ley 1708 de 2014 con sus modificaciones y la regulación atinente a las medidas cautelares prevista en sus artículos 87 y 88 instruye que las mismas tienen carácter preventivo y no sancionatorio, porque protegen el derecho a la propiedad, garantizan el principio de publicidad y limitan el tránsito de bienes afectados en el comercio de manera provisional, mientras se adopta una decisión de fondo.

Para que su decreto (el de las medidas) resulte procedente, debe perseguir evitar que los bienes cuestionados sufran variación en su titularidad, deterioro, extravío o destrucción, o cesar el uso o destinación ilícita; y en cada caso se estudiará de cara al control de legalidad la causal invocada y su legalidad

¹⁴ URBANO MARTÍNEZ José Joaquín, La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal. Ediciones Nueva Jurídica, 2 edición. 2013 pg.103.

misma, para conjurar o no las restricciones, resaltando sus características del ruego, como son su posterioridad al dela resolución dela medida, su ruego, el acatamiento de las reglas y técnicas y su escrituraria; reseñaron los tintes de publicidad y respeto por los derechos de los afectados que deben primar a partir de la materialización de las medidas cautelares.

La Corte Constitucional precisa las medidas cautelares como heramientas jurídicas con las cuales el régimen, en este caso el extintivo resguarda, de manera temporal y momentánea, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo pleito, por lo que cumple la función de proteger anticipadamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello, esta Corporación señaló, que estas medidas aseguran y certifican el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ficticios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido. Por ello, las medidas cautelares se definen como accesorias, puesto que su existencia depende de un proceso originario, instrumentales, puesto que no constituyen un fin en sí mismas, sino que buscan proteger la integridad de un derecho controvertido en el proceso originario y provisionales y temporales por lo cual sólo se mantendrán mientras que el proceso dure o mientras que el riesgo de la integridad del derecho controvertido persista.

Sobre la temporalidad de las medidas, en primera fase las mismas tienen un marco de tiempo de seis (6) meses tal como lo consagra el artículo 89¹⁵ del CDEDD.

¹⁵ Código de Extinción de Dominio

Artículo 89. Medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

Sobre el presente tópico, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Extinción del Derecho de Dominio- en providencia del 11 de enero de 2.023¹⁶ MP Pedro Oriol Avella Franco precisó:

*“... Así las cosas, sea lo primero mencionar que la solicitud de control de legalidad estuvo en poder de la Fiscalía desde el 24 de marzo hasta el 12 de mayo de 2022, novedad que, si el defensor estima oportuno, podrá poner en conocimiento de las autoridades en materia disciplinaria. No obstante, aun tomando en cuenta la fecha de vencimiento propuesta por el profesional, esto es, 1 de marzo de 2022, lo cierto es que ya existe la demanda extintiva, concretamente desde el 18 de marzo, por tanto, **operó el principio de preclusividad de las actuaciones procesales, de manera que, con la interposición de tal acto, además de haberse superado el supuesto de hecho previsto en la citada norma, quedaron superadas las etapas y oportunidades procesales anteriores.** En otras palabras, para la Sala no es posible retraer la discusión a la vigencia de un término fenecido, actualmente inexistente, o caducado por el efecto de la formulación de la demanda.”¹⁷*

13. PROBLEMA JURIDICO

El enunciado motivacional de la solicitud de control de legalidad arroja una dificultad jurídica que si bien no se encuentra ligada taxativamente a las causales del 112 id, si lo está a la causal que por vía jurisprudencial se ha destacado como vigencia, caducidad o vencimiento de la medida cautelar y es planteada de la siguiente forma:

1. ¿Desde la materialización de la medida y su vigencia de seis (6) meses contenida en el artículo 89 id, la misma puede subsistir en tiempo

Excepcionalmente, el Fiscal podrá decretar medidas cautelares antes de la demanda de extinción de dominio, en casos de evidente urgencia o cuando existan serios motivos fundados que permitan considerar la medida como indispensable y necesaria para cumplir con alguno de los fines descritos en el artículo 87 de la presente ley. **Estas medidas cautelares no podrán extenderse por más de seis (6) meses**, término dentro del cual el Fiscal deberá definir si la acción debe archivarse o si por el contrario resulta procedente presentar demanda de extinción de dominio ante el juez de conocimiento.

¹⁶ Radicado 05000312000202200022 01, aprobado acta No. 001.

¹⁷ Negrillas y subrayas propias del despacho.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

adicional razonable sin que se haya presentado la demanda para el cumplimiento de sus fines?

14. RESOLUCIÓN DEL ASUNTO EN PARTICULAR

Sea lo primero significar que para el caso de marras, que ya en un principio se había presentado la demanda, como lo reconoce el mismo libelista al advertir que la demanda fue presentada el **24 de junio de 2.022** con una diferencia de destiempo de aproximadamente un mes, tiempo éste de más que se justifica la complejidad del caso, el número de bienes involucrados y otras circunstancias como pandemia, empero en esencia y concreción para aquel entonces ya se había presentado la demanda, lo que siguiendo las líneas del H. Tribunal en la referenciada providencia del Magistrado Pedro Oriol de fecha 11 de enero de 2.023 la solicitud de control de legalidad es inapropiada y extemporánea por preclusividad del momento procesal. Dice: *“En consecuencia, deviene improcedente agotar la discusión respecto de la naturaleza del término establecido en el artículo 89 de la Ley 1708 de 2014, o entrar a resolver si se trata de un término de caducidad o de un plazo evaluable acorde a los criterios que determinan su razonabilidad o estimación de mora judicial, porque como se dijo antes, aquella oportunidad procesal se halla precluida.”*

A momento de ésta solicitud de control, la fiscalía ya había presentado su intensión de demanda y ello cuenta como actividad judicial que pro el mismo hecho de coexistir frena el tiempo de caducidad de la medida cautelar. Que la demanda sea inadmisibile por falta de unos requisitos y después rechazada, obsérvese, que la actuación de la fiscalía al decretar las medidas cautelares antes de la presentación de la demanda, y según el artículo 89 del Código de Extinción de Dominio, modificado por el artículo 21 de la Ley 1849 de 2017, no están

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

supeditadas a la aprobación de la demanda por el operador judicial, sino a la presentación de la demanda.

Actuación reiterada por el apoderado judicial, en señalar que la demanda fue presentada el día **24 de junio de 2022**, que correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de dominio de Antioquia, siendo inadmitida el **15 de septiembre de 2022** y el **4 de octubre de 2022** se rechazó la demanda de extinción de dominio. De otra parte, verificada la actuación en el expediente que cursa en el juzgado homólogo¹⁸, se estableció las siguientes actuaciones: i.- Con fecha del día **9 de diciembre de 2022**, se encuentra registrada la demanda de extinción de dominio presentada por la Fiscalía 65 de DEEDD, con constancia de reingreso el 15 de diciembre de 2022; ii.- mediante auto de sustanciación No. 37 de **7 de febrero de 2023**, se inadmite demanda de extinción de dominio; iii.- En auto No. 53 de **16 de febrero de 2023**, se admite demanda de extinción de dominio.

Como se pudo evidenciar que la demanda de extinción de dominio, en dos oportunidades fue inadmitida por el operador judicial de conocimiento, por incumplimiento de los requisitos formales descritos en el artículo 132 del CED, con el fin de subsanar, procedimiento éste, que se acoge al descrito en el artículo 90 del Código General del Proceso, no existe norma que trate el trámite previsto para la inadmisión y en caso de no ser atendidos los defectos enunciados se procederá el rechazo, y para el caso, se debe acudir a la regla establecida en el artículo 8 de la Ley 153 de 1887, que señala: “ *Cuando no haya ley expresamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho*”.

¹⁸ Radicado interno 05000 31 20 001 2023 00001 00

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

Sobre este punto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de Dominio-, en auto de 19 de marzo de 2021¹⁹, expresó: “ *Ahora bien, el artículo 90 del Código General del proceso específicamente regula la facultad que tiene el Juez de inadmitir la demanda en varios casos, entre ellos, cuando la demanda “no reúna los requisitos formales” que la misma norma anuncia, es decir, reglamenta el mismo supuesto de hecho aducido en el Código de Extinción de Dominio en su artículo 132 y 141, incluso otorga al Fiscal el mismo plazo de subsanación. En consecuencia, su aplicabilidad es incuestionable.*”

En fin, el ente fiscal, tomó la determinación de la presentación de la demanda al tenor del artículo 89 del C.E.D., modificado por el artículo 21 de la Ley 1849 de 2017, no hay lugar a concebir otra exigencia jurídica u ordenar el archivo, no se encuentra sujeto a su admisibilidad, el parte activa presentó la demanda el 24 de junio de 2022, con las consecuencias procesales conocidas de autos.

De otra parte, es de aclarar, la manifestación de la defensa de que, para el momento de presentación de su control de legalidad, que se entiende que fue el día 13 de enero de 2023, fecha de su reparto de memorial, por cuanto su memorial ni siquiera refiere fecha alguna; y, la demanda de extinción de dominio, según la constancia de radicación dejada por la Oficial Mayor Johana Marcela Ochoa Giraldo del Juzgado Homólogo por la demanda fue presentada desde el 15 de diciembre de 2022, es decir, un mes antes de la solicitud de control de legalidad.

Por lo que lo innegable es que para el momento de su solicitud de control de legalidad ya existía la demanda y se encontraba presentada ante el juzgado

¹⁹ Rad. 050003120002202000008 01, Acta NO.08, Mp. Dr. Pedro Oriol Avella Franco.

Primero y la misma estaba siendo objeto de estudio de admisión, razón más que suficiente para exponer la presencia del principio de **preclusividad de las actuaciones procesales**, de manera que con la interposición de tal acto, además de haberse prevalecido el supuesto de hecho previsto en la citada norma, quedaron superadas las etapas y oportunidades procesales anteriores.

No es posible retraer la discusión a la vigencia de un término fenecido actualmente inexistente, tal como lo advirtió el H Tribunal de cierre, o caducado por el efecto de la formulación de la demanda.

Para todos los tramites, especialmente los judiciales, como el que aquí nos concierne, refulge el **principio de celeridad** que hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa y judicial y se asocia con el art. 84 de la Constitución que prohíbe trámites adicionales para el ejercicio de una actividad que ha sido reglamentada.

También lo está el **principio de eficiencia** que persigue la reducción de las cargas administrativas procesales y la simplificación de procedimientos, con el fin de promover la eliminación de obstáculos injustificados a la actividad jurídica.

Toda actuación judicial²⁰ debe surtirse por antonomasia de manera pronta y cumplidamente **sin dilaciones injustificadas**²¹. Los términos procesales no solamente son perentorios y de estricto cumplimiento, sino que también su transgresión de manera arbitraria, infundada e injustificada conlleva a calificar la conducta del servidor como grave y ponerla en escena potencialmente de

²⁰ La de Jueces, Fiscales, Magistrados y demás afines.

²¹ Este último concepto da alumbramiento a lo conocido como plazo razonable.

sanción disciplinable. Para ello los fiscales, jueces, magistrados y todos los servidores públicos en general que conocen de procesos, es de su obligación impulsarlos de cara a sus responsabilidades, debiéndose dedicar en forma exclusiva a su proceso asignado, respetando la línea de turnos, de despacho, de categoría, importancia, jerarquía o escala, y así promoverlos en todo su caudal y etapas procesales hasta su instancia finiquita.

Así que, desde lo subjetivo el plazo tomado por el operador de instancia para su gestión, tramite, sustanciación, instrucción o decisión, debe ser el acuñado por la norma o **el razonable** que contiene justificación plausible, tal como lo predicó nuestra H Corte en la que indicó que, al analizar esos tiempos de tardanza en exceso, se debe explorar e inspeccionar primeramente desde el juzgamiento de **si se abandonaron sin justificación racional los términos legales previstos para la adopción de la decisión**, en este caso los seis (6) meses dados por la norma (artículo 89 CDEDD); también es de imperativo análisis y cuestionamiento, si la transgresión o quebrantamiento a estos términos o plazos se debe a aspectos de relevancia, de dificultad, notabilidad, a la complejidad, al enredo, a la connotación o barullo nacional, regional o municipal, a la naturaleza del asunto, complicación intrincada y profunda del caso, al número de personas vinculadas, al número de bienes vinculados, a la hacienda o caudal de actividad procesal, probatoria e investigativa necesaria para tomar la decisión fundada que conforme a derecho corresponda tomar en sede de su instancia, y en esa medida la actividad judicial se encuentra dentro de un plazo razonable y por ultimo y no menos transcendental, que no concurran

elementos estructurales o de contexto objetivos e invencibles como situaciones de fuerza mayor²² o congestión judicial²³.

La mora judicial se ha definido por La Corte²⁴ como un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales **que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos.**

Ya en la sentencia T-803 de 2012 se definió la mora judicial²⁵ y se reiteró que es necesario valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento para definir si se configura la lesión de derechos fundamentales. Para ello, se consagraron los siguientes criterios:

- (i) El incumplimiento de los términos judiciales;
- (ii) El desbordamiento del plazo razonable, siendo necesario valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento;
- (iii) La falta de motivo o justificación razonable de la demora; y

²² La fuerza mayor hace referencia a la existencia de un hecho que por su magnitud es imposible de resistirlo. artículo 64 del Código Civil

²³ La congestión judicial, entendida como el volumen de la demanda superior a la capacidad razonable de respuesta de la Rama Judicial, y el atraso endémico de la justicia, entendido como la demora en la definición de la controversia jurídica sometida a consideración del juez, respecto del tiempo normativo establecido.

²⁴ Sentencia T-186/17

²⁵ Se definió la mora judicial como “un fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia”, y que se presenta como “resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos. No obstante, para establecer si la mora en la decisión oportuna de las autoridades es violatoria de derechos fundamentales, es preciso acudir a un análisis sobre la razonabilidad del plazo y establecer el carácter “injustificado” en el incumplimiento de los términos. La mora judicial se justifica cuando: se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende, se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes”.

- (iv) El funcionario incumplidor debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH), al igual que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia colombiana, han expresado que el **plazo razonable**, es el derecho que regula la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible.

El concepto plazo razonable resulta ser un concepto jurídico indeterminado que igual se deberá respetar -teniendo en cuenta los diversos parámetros desarrollados- si se pretende, como fin último del proceso, el obtener una decisión jurisdiccional sin demoras innecesarias y en tiempo oportuno.

No toda tardanza o mora judicial envuelve la infracción de los derechos y garantías fundamentales, por lo que es necesario que se compruebe primeramente si se incurre en un desconocimiento del plazo razonable y la inexistencia o no de un porqué que lo justifique.

Si bien la fiscal asignada en este caso en particular, formalizó su intención de demanda en dos oportunidades, la situación fue morigerada con cierto termino que resulta justificable por la reorganización de la demanda y concreción de criterio de legalidad como los exige el artículo 132 id.

No es que, en ese interludio de la admisión de la demanda, de la inadmisión, de la corrección la fiscalía continúe con práctica investigativa, sino que es el tiempo que ocupa para corregir, enmendar la demanda y ajustarla a los preceptos legales y judiciales y este término resulta plausible y aceptable.

La experiencia judicial que se tiene, de estos asuntos en particular por parte de este operador de instancia, ha de advertirse y concretamente respecto de éste asunto en particular que se somete a control, que la demanda involucra un número considerable de bienes a extinguir, y en ellas varios individuos que a su vez bajo la modalidad de prestanombres o testaferrato para eludir el rigor de la acción extintiva. Denota complejidad, embrollo y cuidado, donde la actividad investigativa y probatoria fue mucha, diligente y cuidadosa, por el número de participantes como sujetos, intervinientes y de bienes, y en esa medida la actividad de la fiscalía considera este operador que se encontró dentro del plazo razonable para presentar su demanda.

El despacho comparte los postulados presentados positiva y asertivamente por el Ministerio de Justicia y del derecho, contestes con los propuestos por el despacho como fundamento de esta decisión, en punto a que se desestime la solicitud de control de legalidad y se reconozca la no caducidad o vigencia de las medidas cautelares decretadas, a razón de que se explica y justifica el plazo de mora causado por el ente fiscal.

Es cierto que la normatividad le exige a la fiscalía un término **preclusivo** para la presentación de la demanda de extinción de dominio cuando se imponen medidas cautelares antes de la presentación de esta, que es de 6 meses, pero no se puede desconocer que jurisprudencialmente se ha venido desarrollando el concepto de **plazo razonable**, como acá se ha explicado en esta providencia.

Efectivamente el desconocimiento del plazo razonable trastoca evidentemente otras garantías fundamentales como lo es el debido proceso, derecho a la propiedad, derecho de defensa, acceso a la administración de justicia entre otras, empero el examen del incumplimiento del plazo razonable no debe ceñirse de

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

manera exclusiva y automática al conteo del tiempo transcurrido dentro de las actuaciones judiciales sin que haya una decisión de fondo (la demanda o el archivo) si no que debe haber razones que justifiquen su desconocimiento, así también lo ha entendido la Corte Constitucional en Sentencia T-502 de 1997.
M.P. Hernando Herrera Vergara:

(...) el mero incumplimiento de los plazos no constituye por sí mismo violación del derecho fundamental indicado, ya que la dilación de los plazos puede estar justificada por razones probadas y objetivamente insuperables que impidan al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión”1. En otras palabras, “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley (...)

Contrario a lo que presenta el petente para este despacho en el caso concreto si existen situaciones extraordinarias que lleven a justificar la tardanza de la fiscalía, en este caso a sentir en lo personal, en lo inspeccionado y explorado en el expediente, y por lo acertadamente justificado por a la fiscalía y por lo dicho y corroborado por los intervinientes, lo fue por lo propio de la naturaleza y complejidad del asunto.

Para el despacho si son notables la complejidad del asunto, y el número de bienes afectados, de hecho, se reparten por grupo especial y al incorporarlos en la demanda estos deben tener identificación y descripción detallada, en las voces del artículo 132 CDEDD, de hecho, por inexactitud son muchas las demandas que se han declarado inadmisibles, lo que hace que el asunto sea más complejo y complicado²⁶, por lo que las circunstancias especiales de esta causa

²⁶ En este asunto en especial se hicieron los requerimientos de:

- Los folios 78 a 81 del cuaderno principal cuarto son ilegibles, sin embargo, parece ser la misma calidad que tiene el documento original pues todo el cuaderno está escaneado a buena calidad. Por lo que se ruega que este medio de conocimiento sea aportado de manera legible
- Los folios 199 a 206 y 256 a 268 del cuaderno de anexos primero son ilegibles (Se deberán escanear a mayor resolución o manifestar si la fuente original tiene esa misma calidad que la hace ininteligible)
- Falta el folio 165 del cuaderno de anexos sexto
- Faltan los folios 73 y 74 del cuaderno de anexos octavo
- Falta el folio 36, 67, 68, 75, 295 del cuaderno de materializaciones de medidas cautelares primero

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

están acreditadas por quien en principio incumplió el plazo en este caso la Fiscalía, en términos en verdad intrascendentes.

Se le recuerda a las partes e intervinientes en esta causa que las medidas cautelares decretadas en el presente trámite de extinción de dominio son de carácter preventivo, estacional, y temporal, y no sancionatorio, pues protegen el derecho de propiedad, garantizan el principio de publicidad y limitan transitoria y temporalmente, entre otras, su disposición y circulación en el

-
- *El cuaderno de materializaciones de medidas cautelares primero no está indexado*
 - *Una gran mayoría de folios del cuaderno de materializaciones de medidas cautelares segundo son completamente ilegibles*
 - *El cuaderno de materializaciones de medidas cautelares segundo no está indexado.*
 - *Al identificar, ubicar y describir los bienes que referencia en el capítulo 4 de la demanda pagina 29 y siguientes, deberá precisar con referencia a cita de página o relacionada en el mismo cuadro descriptivo la ubicación del folio donde obra la matrícula inmobiliaria dentro del expediente. En este mismo apartado deberá informar la cédula o número catastral del respectivo bien, pues esta información constituye factor determinante de su identificación y ubicación y así mismo informar en que paginario dentro del expediente obra esta matrícula catastral. También deberá precisar en qué parque del expediente extintivo obra la escritura pública que se anuncia como título de propiedad y linderos. Asimismo, informará que bienes concentran o soportan derecho crediticio a través de garantía hipotecaria o prendaria, o de otra naturaleza. De igual manera deberá presentar el avalúo de todos y cada los bienes, pues este dato es de trascendencia en la medida en que se quiera favorecer al particular en las voces del 120 del CDED.*
 - *Respecto del apartado nro. 5 de la demanda que refiere a las pruebas en que se funda la misma, deberá indicar una a una la ubicación de la prueba dentro del expediente indicando cuaderno y folio o folios, pues no todas las pruebas o medios de conocimiento tienen esta referencia de ubicación que se hace necesaria y es importantísima para su confrontación y convalidación.*
 - *Respecto del apartado nro. 6 de la demanda que refiere a las medidas cautelares, deberá indicar una a una cuales se materializaron y sobre que bienes e indicar adicionalmente la ubicación de la prueba de la materialización dentro del expediente.*
 - *Con relación a la petición especial donde la delegada de la Fiscalía solicita en su escrito de demanda se tenga en cuenta la retribución establecida en el artículo 120 de la Ley 1708 de 2.014 que fue modificado por el artículo 29 de la Ley 1849 de 2.017, del 5% de la enajenación de los bienes producto de extinción que están ligados a la organización "CLAN DEL GOLFO", en favor de CARLOS ANTONIO MORENO TUBERQUIA con c.c. 1.1002.975, a razón de que pues gracias a su colaboración se identificaron bienes de su propiedad y del grupo armado organizado en las voces del artículo 120 del CDED la delegada fiscal deberá proponer motivadamente la tasación presentando los argumentos de facto y razonables para la procedibilidad de su petición, pues la presentada es bastante insípida y mínima de cara a la carga argumentativa. Parágrafo. El Fiscal General de la Nación fijará los criterios que deberán aplicarse para evaluar el grado de eficacia de la información y/o colaboración del particular".*
 - *Deberá precisar con relación a que bien o bienes en particular objeto de esta acción extintiva están llamados en el proceso y vinculados los señores Arley Rueda Puerta, Carlos Antonio Moreno Tuberquia, Luis Carlos Madarriaga, Jhonatan Alexander Sajona Pereira, Banco Agrario, Banco Popular, Luz Dary Rueda Manco, Miguel Maza Solano y German Darío Pérez.*
 - *Con relación a los apoderados que representan afectados en esta causa deberá precisar la ubicación del memorial poder otorgado a estos, indicando cuaderno y folio, y si se le reconoció personería para actuar o no en sede de fiscalía.*
 - *Con relación a las personas jurídicas objeto de extinción deberá indicar la ubicación de sus certificados de existencia y representación, y de la sociedad precisar no solo su composición accionaria.*
 - *para todos los bienes deberá precisar qué porcentaje del derecho de dominio se persigue en extinción, esto es si es el 100% o que cuota o porcentaje de éste.*
- Se recomienda el uso de las herramientas de edición de archivos PDF, que se pueden encontrar en Internet y que son de uso gratuito, para ahorrar tiempo y esfuerzo en la labor de escanear nuevamente todo el cuaderno. Se pueden encontrar algunas en el siguiente enlace: <https://smallpdf.com/es/herramientas-pdf>

comercio de manera momentánea y provisional hasta tanto se adopte decisión de fondo por el funcionario que conoce de la actuación principal. En este sentido, su decreto y vigencia resultó legítima y procedente por cuanto las cautelares se circunscribieron a los fines previstos en el artículo 87²⁷ de la Ley 1708 de 2014.

Esta incorporación de racionalidad y proporción de contenido garantista y jurídico, lo constituye indefectiblemente la integración, de la norma objetiva que autoriza la restricción del derecho, la motivación y del test de proporcionalidad ampliamente referenciado por la jurisprudencia y doctrina, todos ellos de la mano o armonizados de manera consecuente y coherente con la autorización excepcional sólo para este caso en particular y por las circunstancias especialísimas aquí plasmadas, de extralimitación de vigencia de las medidas cautelares, por estos cortos días de exceso, por encontrarse justificada su tardanza; razones que blindan la decisión a adoptarse por parte de este operador de instancia, para concretar en este caso que las medidas cautelares ya decretadas continúan vigentes, hasta que el funcionario que conoce del proceso principal resuelva de fondo la suerte de las mismas en su sentencia que clausure la instancia.

Por lo que se le significará a la parte solicitante que su pedimento no está llamado a prosperar, porque si bien la causal materialmente se encuentra configurada, el exceso de vigencia como se reclama en el control que se acepta en gracia de discusión, el mismo se encuentra morigerado por el plazo razonable

²⁷ ARTÍCULO 87. *Fines de las medidas cautelares.* Al momento de presentar demanda de extinción de dominio, si no se han adoptado medidas cautelares en fase inicial el fiscal mediante providencia independiente y motivada, ordenará las mismas **con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación ilícita.** En todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de culpa....

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

determinado por la jurisprudencia, concretándose una ausencia de la mora judicial y sumado a ello se presenta la figura de preclusividad del acto procesal para el solicitante, pues cuando despliega su control la demanda ya había sido presentada para admisión ante la judicatura.

La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso e involucra el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, este ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además, doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio²⁸. Por lo tanto, este despacho ratificará las medidas cautelares, por encontrarlas vigentes dentro del plazo razonable.

15. DECISIÓN

²⁸ "[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, abril de 2002; Pág. 314

Auto Interlocutorio 011

Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00

Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio

Asunto. Declara legal medidas cautelares.

Afectados: Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.

Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE ANTIOQUIA**,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR la legalidad formal de las decisiones emitidas por la Fiscalía 65 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio del **22 de noviembre de 2.021**, en el Radicado de la Fiscalía No. 1100160990682019-00469 E.D. mediante las cuales se ordenó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión, sobre los bienes debidamente detallados en el capítulo 4 de esta decisión interlocutoria **por el que se reclama control de legalidad.**

SEGUNDO: Desestimar las pretensiones de control de legalidad invocadas por el abogado Daniel Zuluaga Cosme. (apoderado representante de los presunto afectados²⁹), conforme a lo discernido en esta providencia.

TERCERO: Contra esta decisión procede el recurso de apelación que se desatará ante el Tribunal Superior de Bogotá Sala de Extinción de Dominio, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley 1708 de 2014.

CUARTO: Háganse las respectivas anotaciones y radíquese la actuación en el sistema siglo XXI, además, de conformidad al Acuerdo nro. CSJANTA20-99

²⁹ Gloria María Díez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Díez y Caroline Londoño Díez.

Auto Interlocutorio 011
Radicado 05-000-31-20-002-2023-00003-00
Proceso de Control de Legalidad a medidas cautelares decretadas en trámite de Extinción de Dominio
Asunto. Declara legal medidas cautelares.
Afectados: Gloria María Diez Londoño, José Aicardo Londoño Torres, Adriana María Londoño Diez y Caroline Londoño Diez.
Accionante en control de legalidad: Abogado Daniel Zuluaga Cosme.

del 02 de septiembre de 2.020, Ley 2213 de 2.022 y artículo 44 CDEDD, indíquesele a las partes que deberán hacer uso de los medios tecnológicos y deberán consultar el estado de este trámite a través de la página de la rama judicial, al igual que los estados, edictos, y demás actuaciones procesales, los cuales serán publicados de manera electrónica en la misma página web.

QUINTO: Líbrense las comunicaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VICTOR ALDANA ORTIZ
JUEZ

**JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO
ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE
ANTIOQUIA**

Se notifica el presente auto por **ESTADOS N° 016**

Fijado hoy en la secretaría a las 08:00 AM.
Desfijado en la misma fecha a las 05:00 PM.

Medellín, 09 de marzo de 2023



LORENA AREIZA MORENO
Secretaría

Firmado Por:

Jose Victor Aldana Ortiz
Juez
Juzgado De Circuito
Penal 002 De Extinción De Dominio
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **49764f2ff5733345acdb152002bef78581b27b54ce1799c69f4dd904f4f91e8d**

Documento generado en 08/03/2023 05:16:54 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>